

El Conurbano en la Cuarentena II

Segundo relevamiento a referentes de los barrios populares del Conurbano Bonaerense en el contexto de aislamiento social obligatorio.

Resumen

El informe comunica el resultado del relevamiento colaborativo realizado en los barrios populares del conurbano bonaerense entre los días 22 y 26 de abril. Se basa en **165 entrevistas cortas** realizadas por la UNGS en colaboración con organizaciones y redes territoriales: 129 fueron a referentes territoriales de 20 partidos del conurbano y 6 municipios periurbanos, 20 entrevistas a profesionales y promotores de la salud en el territorio, 6 a referentes de la economía popular, social y solidaria y 5 a cuadros sindicales.

Se indagaron los siguientes tópicos: i-cumplimiento de las medidas de aislamiento social, ii- percepción de los principales problemas surgidos o agravados en los barrios durante la segunda etapa de la cuarentena; iii- trabajo y generación de ingresos en los hogares y en las unidades de la economía popular, social y solidaria; iv- estrategias de familiares y comunitarias para hacer frente al impacto económico, v- evaluación del impacto de la primera etapa de implementación del Ingreso Familiar de Emergencia. vi- condiciones en las que se está desarrollando el abastecimiento y asistencia alimentaria. Asimismo, se enfocó en tres problemáticas relevantes en los barrios en este contexto: vii- violencia de género intrafamiliar; viii- restricciones en la prestación de salud; ix- relaciones con las fuerzas de seguridad a cargo del control del cumplimiento de la cuarentena en el territorio.

Se trata del segundo relevamiento realizado por la UNGS en el ASPO, por lo que la consideración conjunta de ambos operativos permite observar el despliegue del mismo en el conurbano, en la primera y segunda etapa. Entre los principales resultados destacamos:

Cumplimiento del aislamiento obligatorio: Más del 45% de referentes territoriales informan un nivel alto de acatamiento a la medida de aislamiento social, 40% se mantiene acatamiento parcial y menos del 15% refiere bajo cumplimiento. La magnitud de menciones en las cuales el cumplimiento de la medida es considerado “bajo” no ha cambiado respecto de la primera fase del aislamiento.

Percepción de problemas agravados durante el aislamiento social obligatorio: los problemas jerarquizados por los referentes territoriales como surgidos o agravados en el ASPO son los siguientes (en este orden): 1-discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, jerarquizado en el 40% de las entrevistas; 2- dificultad de acceso a la alimentación básica, jerarquizado espontáneamente en un 30% de las entrevistas. A diferencia de la primera etapa de la cuarentena, no se considera que el desabastecimiento sea un problema actual. Tres de cada cuatro referentes informan sí aumentos de precios, en productos frescos; 3-violencia de género al interior de los hogares; 4-salud de la población: restricciones en el acceso a la salud respecto de controles o enfermedades no relacionadas con el COVID-19 y agravamiento de algunos problemas de salud, particularmente las adicciones. Dos temas merecen en esta etapa una atención mayor que en la primera: uno, tensiones y conflictos entre los vecinos, y otro, la cuarentena de niños y niñas (entretenimiento, cuidado, problemas derivados de la

continuidad pedagógica, entre los que se cuentan acceso a equipamiento e internet). Otros tópicos que durante la primera etapa tenían mayor centralidad, hoy se mencionan pero desplazados; la preocupación por los adultos mayores, la falta de cajeros en los barrios y la relación con las fuerzas de seguridad a cargo del control del ASPO.

Discontinuidad de trabajo e ingresos laborales: al inicio de la pandemia, el 52,2% de la fuerza de trabajo activa del conurbano bonaerense en su conjunto estaba desocupada, era cuentrapropista de calificaciones bajas o medias o era asalariada precaria (EPH-IDEC, III trimestre 2019), situaciones todas que se habían agravado en los años inmediatamente anteriores. La heterogeneidad del conurbano supone además que, en los barrios periféricos en los que hacemos este registro, este porcentaje global se eleve entre 6 y 7 puntos.

En este marco, la discontinuidad de la actividad laboral de los autónomos y changuistas, a lo que se suma la suspensión del pago de salarios a los no registrados, deja a gran parte de los hogares de estos barrios en una situación de ingresos laborales 0.

Entre los asalariados no registrados, tiene especial impacto la situación de falta de pago a las trabajadoras en casas particulares. Esto se corresponde con el peso que esta ocupación tiene en el empleo de las mujeres del conurbano (no menos del 13,4% de las ocupadas conurbanas, de las cuales no menos del 45,5% son jefas de hogar).

A diferencia del relevamiento del mes de marzo y aún en el marco del alto nivel de informalidad de la periferia mencionado, en este operativo se destaca que más de la tercera parte de los referentes territoriales da cuenta de problemas laborales surgidos para el segmento de formales que la habitan (despidos, suspensiones sin goce de sueldo y recortes o suspensión de salarios). Con excepción de referencias específicas, gran parte remite a situaciones que se desenvuelven sin que deriven en acciones propiamente gremiales que les trabajadores y sindicatos logren vertebrar al respecto, es decir sin constituirse en “conflictos” que puedan, con mas resonancia, ser relevados como tales en la prensa.

Estrategias familiares y comunitarias e intervención social estatal en el contexto de pandemia: las dos estrategias de sobrevivencia de los hogares de los barrios periféricos en contexto de discontinuidad de ingresos laborales, dependen en última instancia casi exclusivamente de transferencias del Estado: i-percepción de transferencias directas de ingresos: jubilaciones (con importancia de la jubilación de las amas de casa), Asignación Universal por Hijo (valorando su refuerzo en este contexto); Tarjeta Alimentaria (observándose su mención más frecuente en comparación con el relevamiento de marzo) y el Ingreso Familiar de Emergencia (de implementación en el momento del registro); ii-asistencia alimentaria a través de una multiplicidad de canales: ollas populares, comedores, viandas o bolsones de mercaderías. La mención a la asistencia alimentaria directa como la manera más relevante de ir paleando la falta de ingresos se hace presente en al menos la mitad de las entrevistas a referentes territoriales. Junto con ello, y en escasa medida, en esta segunda etapa se retomaron un conjunto de actividades: algunas de ellas exceptuadas recientemente (los talleres

mecánicos y chapistas), y otras changas (en construcción, cortar el pasto, vender ropa, elaboración de alimentos caseros, confección de barbijos, muchas de ellas con entrega a domicilio).

Respecto del Ingreso Familiar de Emergencia: está implementada una primera fase (a titulares de la Asignación Universal por Hijo) y se encuentra en curso el cobro de quienes accedieron inscribiéndose.

Casi el 70% de los referentes evaluó positiva o muy positivamente su impacto, mientras que cerca del 20% manifiesta que no será importante (por acotada en monto o cobertura).

Destacan la pertinencia de la población recortada como objeto de la transferencia, señalando que la han cobrado vecinos “que realmente lo necesitan” (tanto familias en situaciones más vulnerables cuanto changuistas y los cuentapropistas, parte de los cuales tienen incluso trayectorias previas relativamente estables pero se encuentran imposibilitados de continuar su actividad).

Se menciona recurrentemente las frustraciones generadas por no acceder en primera instancia al beneficio. Sin embargo, se hacen presentes las expectativas respecto de su extensión a futuro e incluso respecto de su sostenimiento hasta que siga la imposibilidad de retomar la actividad económica anterior.

La IFE se usó para la compra de alimentos, ya sea en comercios de proximidad, en supermercados y también, en pocos casos, en mayoristas (organizándose entre varios para de esta manera hacer rendir más la transferencia). El segundo ítem mencionado, con mucha menor frecuencia, es el pago de alquileres. Por último, en dos casos se señala que se ha utilizado para hacer algún arreglo en la casa que garantice condiciones sanitarias mínimas para los niños en este contexto de riesgo sanitario.

El impacto de la IFE: se observó en mayor concurrencia a locales de compra de alimentos. Algunas familias que lo reciben en articulación con la tarjeta Alimentar, deciden no concurrir a los comedores, cocinar en sus casas y bajar el riesgo de contagio

Más de la tercera parte de los informantes localizan dificultades en su implementación que refieren a: i-parte de su población objeto no cuenta con dispositivos electrónicos adecuados y/o acceso a internet, la bancarización es limitada y hay escasez de cajeros cercanos; ii-la consideración de la vivienda como unidad para el otorgamiento del beneficio es inadecuada en la medida en que hay distintos hogares por vivienda, hay muchas familias en un terreno, hay población que tiene dirección en centros comunitarios para facilitar trámites, hay barrios en los cuales las direcciones son ficticias para evitar la estigmatización, etc.

Respecto de la asistencia alimentaria: la mayoría coincide en que la asistencia estatal para sostener estas instancias aumentó significativamente y sigue creciendo, pero también en que la situación de restricción es tan grave que ese mayor aporte estatal no llega a ser suficiente. Los informantes comparan la pandemia con la crisis del 2001, destacando la capacidad del estado de vertebrar respuestas que “hacen que la gente no se muera de hambre esta vez”.

Alta valoración positiva de la Tarjeta Alimentar, especialmente en referencia a hogares mono-parentales con varios niños a cargo. Problemas o propuestas en su implementación: i-la

aceptación condicionada de la tarjeta al cobro de un adicional (un 10%,) en muchos comercios de proximidad;ii-pertinencia de ampliar a familias con hijos mayores de 6 años.

Multiplicidad de canales y tipos de asistencia alimentaria: ollas y comedores barriales y comunitarios, viandas para la tercera edad repartidas por las organizaciones, bolsones de alimentos en escuelas públicas (dependientes de la provincia de Buenos Aires) y en locales municipales, viandas escolares, comedores y ollas organizadas por las iglesias y hasta por el ejército en algunos barrios y localidades o incluso por la solidaridad de jóvenes de otros sectores sociales.

La cantidad de ollas se multiplicó (entre tres y seis veces en los distintos barrios); se aumentaron los días de atención y la cantidad de familias atendidas, se abrieron nuevos espacios, creció el número de vecinos que concurren, así como cambió parcialmente su composición, con la presencia de sectores que antes no requerían este tipo de asistencia.

Tanto la cobertura como la eficacia de la asistencia es desigual entre municipios y al interior de los mismos partidos. Esto depende de la diferente magnitud de los recursos volcados por cada municipio pero también de la articulación diferente entre los gobiernos locales y la trama de organizaciones sociales activas en el territorio. Se señalan diferencias al respecto en el informe.

Las organizaciones sociales son las que aportan el trabajo requerido en la preparación y distribución de alimentos. La crisis es también escenario de una notable reactivación de las organizaciones barriales y comunitarias.

Violencia de género: más del 40 % de los referentes informan casos en sus propios barrios o barrios vecinos. Consideran que se agravó especialmente la violencia psicológica y económica hacia las mujeres y también la violencia hacia niñas niños. En la mitad de los casos de violencia de género referidos, la actuación de las organizaciones sociales en general o feministas en particular es clave en la localización y acompañamiento de las denuncias. En el informe se destacan articulaciones entre organizaciones y gestión en distintos municipios, asimismo en distintos municipios se enfatiza la pobre actuación de las comisarías de la Mujer y las dificultades para radicar denuncias.

Restricciones en la prestación de servicios de salud: se suspendieron las acciones vinculadas a la prevención y promoción (con excepción de algunas intervenciones focalizadas en grupos considerados de riesgo). La atención hospitalaria se centró básicamente en las urgencias (por guardia), los partos y las cesáreas programadas. El primer nivel pasó de la atención primaria de salud a la atención de la urgencia (fundamentalmente médica). Un papel destacable ha asumido el SAME, particularmente en la articulación entre la población y los servicios de salud en el territorio.

Se suspendieron controles de rutina de adultos mayores; se redujo la atención de niños, focalizándose en controles de 0 a 1 año. En enfermedades crónicas no transmisibles, se atiende demanda espontánea de pacientes con diabetes o con hipertensión pero no se programan turnos. Se redujeron los controles y las ecografías realizadas a las embarazadas (no en los embarazos de riesgo). Esto es problemático en los barrios más vulnerables donde la frecuencia de consultas de control ya es más baja. Se continúa atendiendo procedimientos de Interrupción Legal de Embarazo, tanto del primer nivel

de atención como en hospitales, modificándose el dispositivo para un menor número de consultas presenciales.

La entrega de medicamentos y vacunas continúa, fundamentalmente bajo el programa Remediar y programas especiales. Se registran dificultades por la imposibilidad de acceder a las recetas y se han registrado discontinuidades en el suministro de algunas vacunas (gripe y neumococo) en el marco de una demanda notablemente acrecentada.

Relación con las fuerzas de seguridad: un 40% de los referentes evalúa que la relación fue buena y sin conflicto, otro 40% entiende que no hubo conflicto pero tampoco presencia policial y un 20% menciona hostigamiento de distinta intensidad.

Las menciones a falta de presencia policial se realizan en términos de evaluación general pero también en casos puntuales: en asentamientos precarios, inacción frente a una denuncia de abuso infantil, la desatención frente a denuncias de violencia de género.

Las situaciones de tensión, hostigamiento o conflicto se localizan en Moreno, San Miguel (especialmente en Barrufaldi), La Matanza, Florencio Varela, Quilmes; en menor medida, en Lanús y José C.Paz, y de forma puntual en Hurlingham, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y Luján. Los ciudadanos que sufren el hostigamiento suelen ser varones jóvenes. Gran parte de las situaciones refieren a respuestas autoritarias o violencia verbal en el control del ASPO (en las colas, retenes a las salidas de los barrios, permanencia en lugares públicos, uso de barbijo) y se concentran en las zonas más transitadas. En menor medida, se remiten detenciones innecesarias, abusos y amenazas, que se consignan en el informe.

Entre la primera y la segunda etapa del ASPO parece haber una disminución de la presencia policial en los barrios (manteniéndose el control en las salidas) y de los casos de hostigamiento, cuestión esta última que algunos informantes reportan como asociada a la intervención de las mismas organizaciones.

Informe completo disponible en:

<https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/El-Conurbano-en-cuarentena.-Segundo-informe.pdf>